

**E**

Editorial

Fin de un problema eterno en la costa

La modernización del agua potable en Bahía Mansa no sólo salda una deuda de 4 décadas, sino que expone la urgencia de agilizar los procesos en obras de saneamiento rural.

El acceso al agua potable es un derecho humano básico que, en contextos de ruralidad, suele colisionar con una burocracia excesiva y una infraestructura que sobrevive al paso del tiempo de manera precaria. El caso de Bahía Mansa, en la comuna de San Juan de la Costa, es un ejemplo paradigmático de esta realidad: una comunidad que por 43 años dependió de un sistema diseñado para otra época y que, durante la última década, debió lidiar con la incertidumbre de grifos secos, baja presión y el constante desabastecimiento estival.

La puesta en marcha del proyecto de mejoramiento y ampliación del Servicio Sanitario Rural (SSR) representa un hito de justicia territorial. No se trata simplemente de una obra de ingeniería; es el reemplazo de una red obsoleta de 1983 por una infraestructura moderna que cuadruplica la capacidad de almacenamiento, pasando de 50 mil a 200 mil litros. Este salto técnico permitirá absorber la demanda de una población que se duplica en verano y, lo más relevante, integrará a 209 familias que hasta hoy dependían de un camión aljibe para cubrir sus necesidades más elementales de higiene y consumo.

Sin embargo, el inicio de estos trabajos, cuya inversión supera los \$4 mil millones, también invita a una reflexión crítica sobre los tiempos del Estado. Resulta difícil de justificar que una iniciativa de carácter vital deba atravesar un periplo administrativo de más de diez años para materializarse. Como bien han señalado dirigentes y autoridades locales, una década de tramitación no sólo desgasta la confianza de la comunidad, sino que altera los costos del proyecto y obliga al Estado a desembolsar millonarios recursos en soluciones paliativas.

El avance en Bahía Mansa debe ser visto como un modelo de lo que la modernización rural requiere: sistemas de filtración avanzada que superen la simple cloración, ampliación de perímetros para incluir a sectores históricamente excluidos y una gestión comunitaria responsable. Para la comunidad debe internalizar la importancia del pago del servicio para asegurar el mantenimiento; por otro, el Ejecutivo debe tomar nota de la necesidad de reformar las políticas públicas para que el acceso al agua en el mundo rural no sea una carrera de resistencia de quince años.